

NACIONES UNIDAS
CONSEJO
ECONOMICO
Y SOCIAL



Distr.
GENERAL

E/CN.4/1155/Add.12
26 agosto 1974
ESPAÑOL
ORIGINAL: FRANCES

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
31.º período de sesiones

INFORMES PERIODICOS SOBRE DERECHOS HUMANOS

Informes sobre los derechos económicos, sociales y culturales, correspondientes al período comprendido entre el 1.º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973, recibidos de los gobiernos en virtud de la resolución 1074 C (XXXIX) del Consejo Económico y Social

MADAGASCAR^{1/}

/20 de marzo de 1974/

- I. Descripción preliminar concisa de las políticas generales de desarrollo económico y social que han contribuido significativamente a garantizar el reconocimiento, la efectividad y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales durante el período comprendido entre el 1.º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973

Durante el período que se examina se han aprobado diversas disposiciones legislativas tendientes a alcanzar los objetivos enunciados.

La ley 71-034, del 14 de diciembre de 1971, sobre la carta del desarrollo, define el marco general de los planes de desarrollo, que tienen por objeto lograr el desarrollo económico, cultural y social de la nación de acuerdo con un enfoque socialista. En particular, tienden al mejoramiento de la condición humana del ciudadano y, más concretamente, a la elevación del nivel de vida, la realización del pleno empleo y el logro de la independencia económica.

^{1/} Además del presente informe, el Gobierno de Madagascar ha transmitido a la Secretaría un legajo con textos de leyes y reglamentos, así como estudios anteriores sobre diversas cuestiones relacionadas con los derechos humanos. Este legajo puede ser consultado por las delegaciones que lo soliciten.

La consecución de estos objetivos requiere, particularmente:

La intensificación de la acumulación interna y nacional de capital;

El control por el Estado de las estructuras económicas y de los sectores fundamentales de la producción y la comercialización;

La promoción rápida de los nacionales a posiciones que les permitan tomar decisiones en materia económica y al control de los mecanismos de producción;

La asignación prioritaria de los medios disponibles a la producción de bienes de producción indispensables para el logro de la independencia económica y de los bienes de consumo de primera necesidad;

La adaptación del sistema fiscal para favorecer el crecimiento y el desarrollo económicos con sentido democrático;

En lo que toca más particularmente a la esfera cultural, cabe destacar el decreto 1570/AC, del 24 de abril de 1972, que dispone la reorganización de la enseñanza privada, y la ordenanza 73-030, del 16 de junio de 1973, sobre la creación de la Universidad de Madagascar.

Esta última ordenanza, así como su correspondiente reglamentación, tiene por objeto, en particular:

Estructurar de la mejor manera posible la Universidad de Madagascar;

Establecer un sistema de enseñanza que asegure al mismo tiempo la formación universitaria y la formación profesional que el país necesita;

Permitir el aprendizaje de la práctica de la democracia y el diálogo dentro del marco de la administración de la Universidad;

Abrir la Universidad al país y confiarle un papel importante en el desarrollo nacional.

II. Influencia que ejercen los instrumentos de las Naciones Unidas en que constan principios y normas para el reconocimiento, la realización y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales y, en particular, medidas adoptadas para aplicar tales instrumentos durante el período comprendido entre el 19 de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973

Entre los instrumentos de las Naciones Unidas a los que Madagascar se ha adherido durante el período que se examina, cabe mencionar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, ratificado por la ley 70-001, del 23 de junio de 1970, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por la ley 70-005 del 24 de junio de 1970.

El haber asumido esos compromisos internacionales ha sido uno de los motivos de:

La abrogación de la ordenanza 62-062, del 25 de septiembre de 1962, y de su reglamentación correspondiente, sobre la represión de la vagancia en virtud de la ley 70-013, del 15 de julio de 1970, y la abrogación de la ordenanza 62-001, del 10 de julio de 1962, sobre medidas de policía administrativa contra los ladrones de ganado, en virtud de la ordenanza 72-008, del 11 de julio de 1972. Dicha ordenanza era contraria al principio de la libertad individual y menoscababa los derechos de la defensa.

III. Acontecimientos de importancia en relación con el reconocimiento, la realización y la protección de los derechos económicos, sociales y culturales durante el período comprendido entre el 1º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973

Las cuestiones planteadas bajo este epígrafe se relacionan con el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a un nivel de vida adecuado, el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, el derecho de la familia, la maternidad y la infancia a protección y asistencia, el derecho a la educación y el derecho a tomar parte libremente en la vida cultural.

Al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, el Gobierno de Madagascar reconoció la legitimidad de esos derechos, pero evidentemente se trata de un ideal que se esforzará por alcanzar, pero que no está en condiciones de lograr íntegramente de inmediato. La prueba de esto es que la ley 70-005, del 23 de junio de 1970, en virtud de la que se ratificó ese pacto, contiene la siguiente reserva:

"El Gobierno malgache declara que se reserva el derecho a aplazar la aplicación del párrafo 2 del artículo 13 del Pacto, pues si bien el Gobierno malgache acepta plenamente los principios promulgados en ese párrafo y se compromete a hacer lo necesario para asegurar su aplicación íntegra en una fecha lo más cercana posible, las dificultades de ejecución y, en particular, las consecuencias financieras son tales que la aplicación íntegra de esos principios no puede garantizarse en la actualidad."

Esta reserva se refiere al derecho a la enseñanza primaria gratuita. El Estado no está actualmente en condiciones de asegurar la educación primaria gratuita de todos los alumnos; no tiene los medios para ello; por lo tanto, se ve obligado a tolerar la existencia de la enseñanza primaria privada y pagada, pero tiene el deber de vigilarla y reglamentarla - y para tal fin ha promulgado el decreto 1570-AC del 27 de abril de 1972 - y de prestarle ayuda substancial hasta estar en condiciones de absorberla. El reconocimiento de un derecho es una cosa, pero su realización es otra.

Podría hacerse la misma observación respecto de la aplicación del principio enunciado en el artículo 9: el reconocimiento del derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social. Los gastos de seguridad social que corren por cuenta del Estado en los países desarrollados son enormes: todos los trabajadores están afiliados a su caja y hacen una aportación, ya sea que sus ingresos provengan de la agricultura, el comercio, una actividad remunerada o incluso una profesión liberal. Pero en Madagascar, donde no se dispone de los mismos medios financieros, el Gobierno se ha visto obligado a limitar la afiliación a los trabajadores asalariados. Estos trabajadores reciben asignaciones familiares por medio de la Caja nacional de previsión social; la Caja les reembolsa asimismo los gastos de hospitalización en caso de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Los trabajadores asalariados reciben servicios médicos gratuitos de los organismos sanitarios entre empresas, como el OSTIE; a falta de contratos

especiales de trabajo o de convenio colectivo donde se estipule expresamente el reembolso por los empleadores de los gastos de hospitalización, los trabajadores hospitalizados reciben la asistencia médica que es de derecho común. Pero estos derechos están por el momento limitados a los trabajadores asalariados. En cuanto ello sea financieramente posible y el nivel de vida de todos sea lo suficientemente elevado para que puedan efectuar aportaciones, estos derechos se extenderán a todos los trabajadores, tal como en los países desarrollados.

Puede decirse lo mismo del derecho a la protección contra el desempleo y el subempleo. Para poder aplicarlo, es necesario que el Estado disponga de un fondo de desempleo importante que le permita subvencionar a los desempleados, lo cual no ocurre actualmente.

Es importante señalar, además, que algunos derechos consagrados por el Pacto, por ejemplo el "derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados" no dependen solamente del Estado, sino fundamentalmente de cada individuo.

Con estas reservas, la legislación malgache consagra ya, en lo esencial, los derechos enunciados por el Pacto:

El derecho a trabajar (artículo 6)

El derecho a condiciones de trabajo equitativas (artículo 7)

Los derechos sindicales (artículo 8)

El derecho relativo a la maternidad, la infancia, el matrimonio y la familia (artículo 10)

El derecho a un nivel de vida adecuado (artículo 11)

El derecho a la salud (artículo 12)

El derecho a la educación (artículo 13)

El derecho relativo a la ciencia y la cultura (artículo 15)

IV. Medidas encaminadas a asegurar que disfrute de los derechos mencionados en la parte III supra una proporción cada vez mayor de la población, sin distinción alguna de raza, color, idioma, sexo, religión u opinión política

Respecto de estas medidas, puede señalarse en particular:

1) El decreto No. 3743, del 7 de octubre de 1970, por el que se creó un Comité nacional para la promoción de la mujer y la protección de la infancia; este Comité, compuesto por delegados de organismos privados y representantes de la administración pública, tiene la tarea de asesorar y formular recomendaciones a los departamentos, servicios e instituciones responsables de la acción social.

2) La ordenanza No. 73-009, del 24 de marzo de 1973, que dispone la estructuración del medio rural para que el pueblo ejerza control sobre el desarrollo.

3) La ordenanza No. 73-010, del 24 de marzo de 1973, sobre la organización y el funcionamiento de los Fokotany.

Entre los proyectos en preparación que persiguen el mismo fin, cabe señalar:

Un proyecto de decreto sobre la creación de un comité nacional de alimentación y de acción para el desarrollo;

Un proyecto de decreto sobre la creación de un comité permanente de lucha contra el analfabetismo;

Un proyecto de decreto sobre la creación de un consejo nacional de acción social.

V. Dificultades con que se ha tropezado al asegurar el disfrute de los derechos mencionados en la sección III supra

Estas dificultades son fundamentalmente de tipo financiero, como ya se expuso en la sección III. Solamente la industrialización y el desarrollo económico del país, tarea a la que se consagra el Gobierno, permitirá resolverlas.

*
* * *

El derecho a la educación

1. Derecho a la enseñanza primaria gratuita

En sus esfuerzos de democratización de la enseñanza, el Gobierno atribuye una importancia muy particular a la extensión de la enseñanza primaria.

No obstante, debido a las limitadas posibilidades financieras del Estado y frente a la enorme necesidad de escuelas a causa de la explosión demográfica (la tasa de crecimiento demográfico de Madagascar es del 3%) no ha sido posible proporcionar enseñanza primaria gratuita a todos los niños malgaches de 6 a 14 años. Esta tarea no podrá sino ser gradual.

Así, al lado de la enseñanza primaria pública, que está íntegramente a cargo del Estado (edificios, materiales y equipos, personal y su alojamiento), existe una enseñanza primaria privada (confesional o no) pagada.

Sin embargo, el Estado otorga subvenciones a los establecimientos de enseñanza privada y a los padres de los alumnos de esos establecimientos.

También debe señalarse que las comunidades de las aldeas (Fokonolona) tienen una participación cada vez más activa e importante en el desarrollo de la enseñanza primaria (construcción y mantenimiento de locales escolares, sueldos y alojamiento de los maestros).

Actualmente, para una población de 2.108.100 niños en edad escolar se cuenta con lo siguiente:

Alumnos		Maestros		Establecimientos	
Sector público	Sector privado	Sector público	Sector privado	Sector público	Sector privado
743 721	260 724	9 487	6 066	4 477	1 577
<u>Total:</u> 1 044 445		15 553		6 054	

/...

Para solucionar el problema se deberá:

- a) establecer una infraestructura escolar adecuada (locales y equipos);
 - b) formar personal docente en número suficiente y obtener los fondos para su remuneración, de modo que la proporción maestro-alumno sea aceptable (actualmente esa proporción se calcula en más de 80 alumnos por maestro para toda la isla, en escuelas públicas y privadas);
 - c) crear una estructura escolar racional a fin de repartir debidamente las escuelas, teniendo en cuenta la ubicación de las aldeas interesadas.
2. Derecho a la igualdad de acceso a la enseñanza superior, sobre la base de la capacidad o del mérito, incluso la enseñanza técnica, vocacional y profesional

Los únicos criterios que se aplican para el acceso a la enseñanza superior son la capacidad y el mérito de los estudiantes.

Además, el Estado hace esfuerzos para descentralizar la enseñanza superior.

La concesión de becas permite continuar los estudios superiores a los estudiantes de familias de recursos relativamente modestos que las merezcan.

En algunos establecimientos (en particular las escuelas nacionales) el número de lugares es limitado y el ingreso se reserva a los candidatos que hayan pasado un examen.

3. Derecho de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos

Los padres tienen entera libertad para escoger el tipo de enseñanza que habrá de impartirse a sus hijos. Básicamente, los programas que se siguen en los establecimientos de enseñanza pública y privada son iguales, ya que los exámenes y los concursos son organizados por el Estado.

*

* *

ANEXO III.

Resolución 16 (XXIII) de la Comisión de Derechos Humanos,
aprobada el 22 de marzo de 1967

A. El derecho al trabajo

1) Derecho a la libre elección del trabajo

Ya no existe el delito de ocio.

La ley 70.013, del 15 de julio de 1970, abrogó la ordenanza No. 62.062, del 27 de mayo de 1962, modificada por la ley 65.006, del 7 de julio de 1965, así como su decreto de aplicación No. 63.268, del 15 de mayo de 1963, relativos a la represión del ocio.

2) Derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias

La situación anterior, descrita en el informe precedente, se mantiene sin cambios.

3) Derecho a la protección contra el desempleo y el empleo insuficiente

La información proporcionada en el informe anterior sigue siendo válida.

4) Derecho de toda persona que trabaja a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, condiciones de existencia digna

El Gobierno malgache procedió en 1971 y nuevamente en 1972 al aumento del salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG), aumento que ya fue señalado en el informe anterior. A partir de marzo de 1974 se aplican tanto el aumento de los sueldos bajos como la uniformación de los índices de las diversas clasificaciones profesionales y la reducción de las zonas de salarios de cuatro a dos (véase el Journal Officiel del 18 de marzo de 1974). Dado que el presente informe sólo abarca el período comprendido entre el 1.º de julio de 1969 y el 30 de junio de 1973, en el próximo se darán más detalles sobre estos cambios.

5) El derecho de toda persona, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual

La información proporcionada en el informe anterior sigue siendo válida.

6) Derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas

La información proporcionada anteriormente sigue siendo válida, en particular en lo concerniente al Convenio No. 52.

/...

7) Derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al sindicato de su elección

La información proporcionada en los informes anteriores sigue siendo válida.

8) Derecho de huelga

La información proporcionada anteriormente sigue siendo válida.

B. El derecho a la seguridad social, incluso al seguro social en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de los medios de subsistencia por circunstancias independientes de la voluntad

La información proporcionada anteriormente sigue siendo válida, en particular en lo concerniente al Convenio No. 118.

D. El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental

Los informes incluidos en el legajo correspondiente al período examinado (véase la nota 1/ *supra*) permitirán evaluar los esfuerzos realizados en las siguientes esferas:

2) Mejoramiento de todos los aspectos del saneamiento del medio y la higiene industrial.

4) Creación de condiciones adecuadas para asegurar a todos servicios médicos y atención médica en caso de enfermedad.
